

COVID 19: La vida antes que la política y el negocio

La pandemia está cobrando demasiadas vidas en el país y los esfuerzos institucionales para reducir las muertes y el sufrimiento de las familias bolivianas no son suficientes y no están respondiendo oportunamente a este problema de salud pública. Pesa sobre los líderes del mundo y de las autoridades nacionales y locales una responsabilidad con la humanidad.

Nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de salud buscan enfrentar la pandemia en medio de un sistema de salud en estado crítico y precario. A ellos y ellas, nuestro mayor reconocimiento por su entrega para intentar salvar vidas. Expresamos nuestro dolor por la muerte de tantos y tan valiosos profesionales, y nuestra solidaridad con sus familias.

Escuchamos con preocupación declaraciones de autoridades, algunas de forma irresponsable e insensible, que nos ponen en alerta para demandar respuestas urgentes. No necesitamos proyecciones ni planes mediáticos, sino soluciones reales, porque dejar a la población desprotegida frente a un problema de salud pública es una flagrante violación a los derechos humanos. La obligación del Estado y de quienes circunstancialmente lo administran es proteger a su población, garantizando los derechos a la vida y a la salud, el acceso a tratamiento médico oportuno y confiable; además de las medidas económicas razonables que deben acompañar la difícil situación que deja la pandemia.

Ponemos atención en el [informe de Amnistía Internacional y de más de 60 organizaciones y personalidades internacionales](#) que denuncian un escenario tremendamente crítico en la realidad mundial, cuando constatan que los países desarrollados tendrán la cantidad suficiente de vacunas, y que acapararon tanto que inclusive dispondrán de tres veces más la cantidad de dosis que requiere su población; lo que reflejaría que no existen voluntades reales para que la solución sea de acceso universal.

Este informe nos advierte que en los países pobres 9 de cada 10 personas no recibirán este año la vacuna contra la Covid-19. Estamos ante un problema global que requiere una acción global. Nuevamente estamos ante una controvertida realidad de diferencias entre países ricos y pobres. Y al interior de nuestros países, también advertimos brechas de desigualdad.

Exigimos que la vacuna sea universal, más allá de los intereses privados de empresas que pueden llevar a verdaderos genocidios, solo por su ambición e interés de enriquecimiento a costa de la desgracia humana. Es incluso posible el riesgo de que se genere un mercado negro de vacunas, con prácticas deshumanizadas y mercantilistas.

Si bien el Gobierno comprometió la obtención de 15 millones de vacunas, de las cuales solo 6.000 llegarán a fin de mes, es importante que éstas lleguen a tiempo y tengan los estándares de calidad; pero también es necesario que se permitan y regulen iniciativas privadas o de sociedad civil para que lleguen oportunamente al país, no solo por la vía gubernamental, de esta manera contribuimos a que no se vaya a crear un clima de especulación que ya vemos con preocupación en la adquisición de insumos o medicamentos.

Las autoridades deben garantizar el acceso efectivo a medicamentos y a unidades de terapia intensiva para pacientes en estado crítico. El control de precios de medicinas y servicios referidos a la pandemia es de poca magnitud frente a lo que estamos enfrentando.

Demandamos mayor presencia internacional al Gobierno del presidente Luis Arce y respuestas más efectivas. No estamos ante un problema ideológico, sino frente a una crisis estructural que requiere de capacidad de gestión en los distintos niveles del Estado nacional, regional y municipal. Están en juego la vida, la salud y la seguridad de los bolivianos y bolivianas.

Pedimos al Gobierno brindar espacios de apertura y escucha de las organizaciones de sociedad civil, para aunar esfuerzos e implementar medidas consensuadas e inclusivas.

